EL ESTADO EN COLOMBIA TRAS SESENTA AÑOS DE VIOLENCIA: ¿EL MONOPOLIO DE LA COACCIÓN LEGÍTIMA?¹⁴

Clarisa Demattei¹⁵

En Ciencias Políticas solemos afirmar, gracias a la gran definición de Max Weber, que el Estado es una “institución de carácter político de actividad continuada en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (1922:43). Esta definición nos remite a varios conceptos imprescindibles a la hora de analizar un sistema político determinado: la noción de soberanía, de territorialidad y, sobre todo, de monopolio, entre otros. El Estado, de esta manera, es el único actor con la capacidad de ejercer la dominación y la coacción física sobre sus ciudadanos. Sin embargo, ¿cómo explicamos el caso colombiano, entonces, cuyo Estado se ve sobrepasado por la existencia de grupos al margen de la ley que disputan su soberanía y su territorio desde hace más de sesenta años?

La historia política de Colombia es de las más complejas de la región. Desde su independencia y hasta 1958, este país atravesó nueve guerras civiles. La última, protagonizada por liberales contra conservadores, duró treinta y tres años entre 1925 y 1958 y arrojó una cifra de más de 300.000 muertos y más de 11 millones de desplazados internos. Con el objetivo de poner fin a este conflicto de más de tres décadas, liberales y conservadores llegaron a un acuerdo de transición democrática llamado “Frente Nacional”. Mediante este, ambos partidos acordaron alternarse en el poder apoyando a un único candidato presidencial y dividiendo los cargos oficiales por mitades iguales. Si bien este pacto bipartidista logró erradicar una de las guerras civiles más crueles de la historia colombiana, generó otros conflictos paralelos a partir de la década de los sesenta. Durante ese período surgieron varios grupos de izquierda que se levantaron contra el Frente Nacional por considerarlo un pacto restrictivo que limitaba las posibilidades electorales de otras fuerzas como el comunismo. Para ese entonces, el Estado colombiano llevaba solamente cinco años de una frágil estabilidad política en toda su historia desde la independencia. Pero cuando la estructura estatal colombiana aún no había logrado consolidar todas las características esenciales que Weber nos recuerda que debe tener todo Estado, la violencia política nuevamente amenazó el sistema político con la consolidación de los dos grupos guerrilleros principales: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto llevó al Estado colombiano a tomar ciertas decisiones, como realizar la reforma agraria y una mayor redistribución de tierras, dos de los reclamos históricos de las guerrillas. Sin embargo, y a pesar de las distintas estrategias por parte del Estado de Colombia, el conflicto armado no ha hecho sino aumentar. Durante la década de los ochenta, las guerrillas más importantes del país tenían vínculos y negocios con el narcotráfico, lo que generaba un aumento en su poder y en sus recursos. Para mediados de los ochenta, las FARC controlaban el 70 % del norte del territorio colombia-

¹⁴ Una versión original de este artículo fue publicada con el título “La violencia guerrillera en Colombia, una amenaza para el Estado que lleva 60 años de duración”, en *Diario Perfil*, el 16 de septiembre de 2021.

¹⁵ Clarisa Demattei es Doctoranda en Sociología (UCA), Magister en Comunicación Política (Universidad de Alcalá de Henares) y Licenciada en Ciencias Políticas (UCA). Docente regular en diversas materias de grado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Investigadora del CEI. Correo electrónico: clarisademattei@uca.edu.ar.

no, sembrando dudas acerca del control territorial monopólico que debería tener una estructura estatal bajo la mirada weberiana.

Incluso, analizando las cifras que arrojan seis décadas de lucha armada, podemos dar cuenta de la magnitud de uno de los conflictos más longevos del continente. Según la Ley N° 1.448, denominada “...de asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”, hay más de nueve millones de colombianos que son caracterizados como víctimas, ya de sea de manera más directa o indirecta, por haber sufrido o un asesinato, atentados, amenazas, haber perdido a un familiar o incluso haber tenido que abandonar su lugar de residencia e instalarse en otra región del país. De hecho, como causa de este último fenómeno, Colombia es el país que más desplazados internos tiene en el mundo según las estadísticas del propio gobierno colombiano.

En noviembre de 2016, este conflicto parecía finalmente llegar a su fin cuando, después de años de negociación y hasta un rechazo rotundo de la ciudadanía a generar una instancia de conversación y negociación con los grupos guerrilleros, se firmó el acuerdo definitivo en Bogotá entre el gobierno y representantes de las FARC-EP.

En líneas generales, este pacto comprometía a la guerrilla a iniciar un proceso de desmilitarización entregando sus armas para dar por terminado el conflicto. A cambio de eso, el gobierno les garantizaba ciertos territorios agrícolas de propiedad colectiva para el campesinado, el derecho a las FARC-EP a postularse a cargos políticos, un cupo de diez bancas en el Congreso colombiano durante dos legislaturas consecutivas y la prohibición de erradicar ciertos cultivos de drogas considerados “ancestrales”.

Sin embargo, un año después de la firma y la ratificación por parte del Congreso, diversos grupos guerrilleros amenazaron con volver al conflicto si el gobierno colombiano no cumplía con los compromisos asumidos. Sumado a esto, para marzo de 2018, si bien el 80 % de los miembros de las FARC habían entregado sus armas, aún restaban unos 1200 guerrilleros que nunca aceptaron las condiciones del acuerdo y aún hoy se niegan a cumplirlo. Estas tensiones internas dentro de la guerrilla dieron lugar a una separación que creó las llamadas “Disidencias de las FARC”, aquel pequeño grupo residual que desconoce el acuerdo de paz de 2016 y pretende continuar con el accionar ilegal que esta organización venía llevando a cabo desde la década de los sesenta. Así, hoy las Disidencias de las FARC aún mantienen ciertas zonas de influencia a partir de prácticas como el narcotráfico, los secuestros y la extorsión.

Por eso, si bien el conflicto ha mermado en términos de su intensidad, todavía quedan vestigios de esa lucha que amenazan al país con volver a restaurar la violencia del pasado. Actualmente, la presencia de los guerrilleros se limita a ciertos territorios aislados del país donde la presencia del Estado colombiano es débil, como los territorios de la selva en el Chocó (al extremo este del país), Cauca o en el Norte de Santander, próximo a la frontera con Venezuela. Allí, además de la amenaza latente entre el gobierno y las disidencias de las FARC, se suma una disputa territorial guerrillera por el cultivo de coca con otra histórica organización terrorista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De hecho, varios coinciden que el vacío de poder que ha dejado el desarme de las FARC después de 2016 ha sido ocupado por una mayor presencia del ELN en dichos territorios. Según cifras de Cruz Roja, más de 200 civiles han muerto solamente este año en nueve departamentos del país como consecuencia de estas disputas territoriales y más de 33 personas figuran como desaparecidas, lo que supone un aumento del 22 % con respecto al año 2020. Incluso, más de 2000 personas han sido desplazadas de sus territorios debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros. Hoy en día, y aún después de todo el proceso por los acuerdos de paz, la presencia de grupos ilegales ha sido reportada en 300 municipios de los 1100 que componen el territorio colombiano.

Por eso, ¿las FARC realmente alguna vez se fueron? Para este grupo guerrillero, las Disidencias no son más que desertores del proceso de paz que nada tienen que ver con el grupo gestado en la década de los sesenta. Sin embargo, la opinión pública de dicho país no piensa lo mismo. Para la sociedad colombiana, si bien es real que la intensidad del conflicto se ha reducido sustancialmente desde 2016, las FARC –disidencia o no– realmente nunca se han ido y el año 2021 marca un incremento de la violencia producto del conflicto armado. En paralelo, también preocupa la proliferación de la presencia de la otra organización guerrillera, el ELN, con quienes el

gobierno colombiano ha intentado negociar en diversas oportunidades sin éxito. De hecho, varios organismos internacionales coinciden en que el ELN hoy se ha convertido en la guerrilla más importante de América Latina.

Como si fuera una película del pasado, hoy la sociedad colombiana es testigo nuevamente de un debilitamiento de las potestades del Estado colombiano que le impide garantizar la soberanía estatal y el orden público en el territorio nacional, lo que nos lleva a la eterna pregunta jamás respondida: ¿podrá alguna vez Colombia encontrar la paz y la unidad de su sociedad?